



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, cuatro (4) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Demandante: CARLOS ALONSO DE LOS RIOS PÉREZ
Demandado: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.
Radicado: 05001 31 05 001 2018 00103 01
Sentencia: S-196

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a dar trámite al grado jurisdiccional de Consulta concedido a favor del demandante, con ocasión de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín el día 20 de octubre de 2021.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES

CARLOS ALONSO DE LOS RIOS PÉREZ demandó a EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P., pretendiendo se declare que le asiste derecho al reajuste de la pensión de jubilación teniendo en cuenta todos los conceptos devengados en el último año de servicios, junto con los

intereses moratorios y/o la indexación de las condenas y las costas del proceso.

LOS HECHOS:

Expone como fundamento de sus peticiones, que trabajó al servicio de la Empresa Antioqueña de Energía EADE S.A., desde el 14 de julio de 1980 hasta el 26 de junio de 2003; que dicha empresa le reconoció pensión de jubilación a partir del 27 de junio de ese mismo año como consecuencia del plan de pensiones anticipadas que se adoptó; que ese plan quedó consagrado en la Adenda a la Convención Colectiva 2001-2003 suscrita entre el Sindicato y la empresa; que en el artículo tercero se estableció que la pensión de jubilación sería liquidada con el promedio de lo devengado en el último año de servicios; que como trabajador de la empresa se beneficiaba de la Convención Colectiva 2001-2003 y la mencionada Adenda; que el monto inicial de su pensión fue de \$991.005; que fuera del salario y las prestaciones sociales, en el último año devengó otros conceptos como subsidio familiar, viáticos, auxilio por educación, entre otros; que todos los conceptos devengados en el último año ascendieron a \$34'385.930, por lo que su pensión inicial debió ser calculada en la suma de \$2'141.121; que EADE fue liquidada el 25 de junio de 2007; y que EPM asumió la totalidad de obligaciones según contrato de conmutación pensional N° 14657.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Al contestar, EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN se opuso a las pretensiones de la demanda por cuanto en los términos a la adenda a la Convención Colectiva de Trabajo 2001-2003, la pensión de jubilación del demandante fue liquidada y reconocida por la extinta EADE de acuerdo con los factores salariales devengados en el último año de servicio y que son la base para construir el ingreso base de cotización de acuerdo con el Decreto 1158 de 1994, que modificó el decreto 691 de 1994. Sobre los hechos, dijo que no le consta directamente el tiempo

laborado por el actor con EADE, no obstante, de acuerdo a los archivos de la entidad, acepta la fecha de vinculación y retiro conforme al contenido de la Resolución 200 del 10 de julio de 2003 que le reconoció la pensión anticipada de vejez, así como la liquidación de la pensión teniendo en cuenta el 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicios y el valor de la mesada pensional reconocida.

Niega que la pensión de jubilación del demandante esté mal liquidada, toda vez que en la referida resolución se tuvieron en cuenta los conceptos prima de bonificación, prima adicional, prima de vacaciones, prima de navidad y salario, sin que los decretos 691 de 1994 y 1158 de ese mismo año consagren otros conceptos para la liquidación de la pensión. Propuso como excepciones de fondo pago, inexistencia sustancial del derecho y prescripción.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

Mediante sentencia del 20 de octubre de 2021, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín ABSOLVIÓ a EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. de todas las pretensiones formuladas en su contra por el demandante, a quien condenó en costas, fijando como agencias en derecho la suma de \$908.526.

Conoce la Sala del asunto por **CONSULTA** a favor del demandante.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro del término concedido para alegar de conclusión, los apoderados de las partes no realizaron manifestación alguna.

C O N S I D E R A C I O N E S

En atención al grado jurisdiccional de CONSULTA en el que se conoce del proceso, procede la Sala a verificar la legalidad del fallo de primera instancia mediante el cual se ABSOLVIÓ a la entidad demandada de

todas las pretensiones formuladas en su contra por el señor CARLOS ALONSO DE LOS RÍOS PÉREZ, relacionadas principalmente con el reajuste de su pensión de jubilación reconocida por la extinta Empresa Antioqueña de Energía EADE S.A. E.S.P.

En este caso no se discute que EADE reconoció al demandante, en calidad de trabajador oficial de una entidad del orden departamental, una prestación económica dentro del plan transitorio de pensión de jubilación, teniendo como fuente normativa la Adenda a la Convención Colectiva de Trabajo 2001-2003¹, a partir del 27 de junio de 2003 mediante Resolución 200 del 10 de julio de ese mismo año, y que para la liquidación de la prestación se tuvo en cuenta el 75% del promedio de lo devengado en el último año servido por el actor.

Consecuente con lo anterior, le corresponde a la Sala precisar –ante todo- si al momento de liquidar la pensión de jubilación reconocida por la extinta EADE al Sr. CARLOS ALONSO DE LOS RÍOS PÉREZ, debían ser incluidos otro tipo de ingresos percibidos por el trabajador distintos a los establecidos en el Decreto 1158 de 1994 como el auxilio escolar, los viáticos, el subsidio familiar, entre otros, relacionados en los hechos de la demanda.

En el contexto que antecede, no debe perderse de vista que la Ley 100 de 1993 tuvo entre sus fines la expedición en un mismo cuerpo normativo de todo el sistema de seguridad social de manera integral, el cual antes venía atomizado en diferentes escenarios, y a raíz de su promulgación fueron proferidos un sinnúmero de decretos reglamentarios que desarrollaban su espíritu. En lo que interesa a este proceso, entre las normas desarrolladoras se encuentra el Decreto 691 del 29 de marzo de 1994, que ordenó la incorporación de los servidores públicos al sistema general de pensiones, y en su artículo 6º reguló lo pertinente al salario mensual de base que debe tenerse en cuenta para

¹ Pactada con los trabajadores de EADE.

calcular las cotizaciones al sistema, de los servidores públicos incorporados al mismo.

Dicho artículo fue posteriormente modificado por el Decreto 1158 del 3 de junio de 1994, el cual quedó concebido en los siguientes términos:

“D.R. 1158/94, art. 1º. Base de cotización. El salario mensual base para calcular las cotizaciones al sistema general de pensiones de los servidores públicos incorporados al mismo, estará constituido por los siguientes factores:

- a) La asignación básica mensual;*
- b) Los gastos de representación;*
- c) La prima técnica cuando sea factor de salario;*
- d) Las primas de antigüedad, ascensional y de capacitación, cuando sean factor de salario;*
- e) La remuneración por trabajo dominical o festivo;*
- f) La remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna, y*
- g) La bonificación por servicios prestados.”*

Lo anterior, guarda armonía con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, que modificó el artículo 3º de la Ley 33 de ese mismo año, en cuanto se ocupó, en el inciso 3º, de definir la obligación de pagar aportes en los siguientes términos: *“En todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes.”*

Se parte entonces del supuesto indiscutido de que el demandante es pensionado –para ese momento- a través de una norma convencional, que no define, ni en la Adenda a la Convención Colectiva, tampoco en la Convención Colectiva 2001-2003, cuáles son los factores integrantes

de la remuneración o factores salariales para efectos de liquidar la prestación económica de la jubilación; únicamente establece que la pensión se liquida sobre el 75% del promedio de lo devengado en el último año servido, por lo cual, considera la Sala, es preciso acudir a los factores salariales que establece la ley, en el sentido de que para los servidores públicos, luego de su incorporación al sistema pensional, se aplica lo señalado en el artículo 3° de la ley 33 de 1985, modificado por el artículo 1° de la ley 62 de mismo año, y el artículo 1° del mencionado decreto 1158 de 1994.

Se advierte asimismo que la norma convencional tampoco dispuso expresamente la aplicación de disposición alguna (v. gr. el Decreto 1045 de 1978), en la que se anunciaran los factores salariales para la liquidación de la pensión de jubilación que le fue reconocida al actor.

Lo anterior postura tiene soporte jurisprudencial en diversas sentencias de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como la SL 718 de 2020, SL 1023 de 2021, SL 1925 de 2021, SL 2614 de 2021, entre otras. En la sentencia reciente – la SL 4511-2021, radicada 79466 del 18 de agosto de 2021 - sobre el tema de aplicación del Decreto 1158 de 1994 cuando la norma convencional no especifique los factores salariales para liquidar la prestación, como acontece en el presente asunto, dijo la Corte lo siguiente:

“En el contexto que antecede le corresponde entonces a la Sala dilucidar si la pensión reconocida al demandante debía ser liquidada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, lo anterior, puesto que la norma convencional dispone que debe liquidarse la pensión de conformidad con el promedio de lo devengado por el trabajador durante el último año de servicios. Así las cosas, y a efectos de resolver el problema jurídico planteado la Sala considera pertinente reiterar el criterio señalado en la sentencia CSJ SL-1982 -2021, al decidir una situación similar. La Sala considera pertinente reiterar el criterio señalado en la sentencia CSJ SL-1982 -2021, al decidir una situación similar.

En el precedente citado en las líneas que anteceden la Sala de Casación Laboral precisó que en los casos en los cuales la norma convencional no especifique los factores salariales a tener en cuenta para liquidar la prestación económica de jubilación, estos deberán consultar, en principio, lo dispuesto en el Decreto 1158 de 1994. Señaló la Corporación que:

[...] en lo relacionado con los factores a ser tenidos en cuenta para establecer el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación, lo que se advierte es que el instrumento convencional respectivo, en verdad, nada dijo sobre ello, sin que tal omisión o indeterminación conlleve, indefectiblemente, como lo formula la censura a que todos los conceptos y por todo su valor deban ser computados y promediados para la obtención del ingreso base pensional. Al respecto, esta Sala en diversas oportunidades al tratar asuntos con matices similares a los aquí abordados, particularmente en la sentencia CSJ SL3158-2017, dejó sentado lo siguiente:

[...] En otros términos, dada la generalidad del acuerdo convencional y la ausencia de una mención expresa de los rubros que constituyen la base para liquidar la pensión de jubilación, no puede hablarse de derechos adquiridos, como lo pretende hacer ver el censor, pues en este caso corresponde acudir a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 33 de 1985, modificado por el artículo 1 de la Ley 62 de la misma anualidad, en armonía con el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994, que modificó el artículo 6 del Decreto 691 de 1994, a fin de determinar los factores constitutivos de la base de liquidación; textos normativos en los que valga resaltar, no se enuncia la prima de vacaciones ni el subsidio de transporte peticionados por el actor, tal y como lo estimó la decisión atacada. De manera que en ningún yerro pudo incurrir el Tribunal al aplicar tales preceptos.

(...)

En igual sentido, se pueden consultar, más recientemente las sentencias CSJ SL15715-2015; SL4349-2015 y SL12399-2016.

En efecto, el criterio anterior ha sido reiterado por esta Sala, al decidir múltiples casos de similares contornos al aquí

estudiado, particularmente, en tratándose de pensiones de jubilación convencional de servidores públicos donde el instrumento convencional nada dice de los factores a ser tenidos en cuenta para determinar la base salarial requerida para liquidar las respectivas prestaciones periódicas. En ese mismo sentido en la Sentencia CSJ SL4086-2017 la Corte señaló:

[...] En cuanto al segundo reparo, relacionado con los factores salariales que deben tenerse en cuenta para el cálculo de la pensión de la actora, es de señalar que cuando un convenio colectivo de trabajo consagra una pensión de jubilación sin establecer en concreto cuáles son aquellos que deben observarse para su liquidación, o cuando el instrumento colectivo en el que supuestamente se establecieron, no obra al plenario, en ningún yerro incurre el juez si con fundamento en las normas que regulan la materia, establece cuáles son los que lo integran.

(...)

Del texto convencional se desprende que la norma solo hace referencia al promedio de lo devengado en el último año, sin que puede inferirse que se realiza remisión a norma especial, como tampoco hace referencia expresa a lo dispuesto en el Decreto 1045 de 1978, luego la norma aplicable es el Decreto 1158 de 1994.

De otra parte, es conveniente hacer claridad en que el Decreto 1045 de 1978 tiene como campo de aplicación «algunas entidades de la Administración Pública del orden nacional para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales señaladas por la Ley para su personal» , a su vez el artículo 2º ordena que “ Para los efectos de este Decreto se entiende por entidades de la administración pública del orden nacional la Presidencia de la República, los ministerios, los departamentos administrativos, las superintendencias, los establecimientos públicos y las unidades administrativas especiales” (CSJ, rad. 39202, del 30 de junio de 2013)».

Así mismo, no le asiste razón al recurrente al señalar que se desconoce lo dispuesto en el Decreto 1919 de 2002 puesto que la norma que resulta aplicable, como se viene afirmando en estos eventos es el Decreto 1158 de 1994, que modificó el

artículo 6 del Decreto 691 de 1994. Entre otras razones por cuanto el Decreto 1158 de 1994 es una norma especial que regula los temas atinentes a las prestaciones económicas del sistema de seguridad social. Así mismo, la Corporación al momento de liquidar las pensiones de jubilación convencional o legal se remite a lo dispuesto en el Decreto 1158 de 1994 (al respecto se pueden consultar las siguientes sentencias: CSJ SL1925-2021, CSJ SL1023-2021, y CSJ SL718 -2020 entre otras."

El artículo tercero de la adenda de la Convención Colectiva 2001-2003 de EADE ESP se determinó que: *"La pensión de Jubilación se liquidará tomando el 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicio y se reconocerá hasta cuando cumpla los requisitos legales para acceder a la pensión en el Régimen de Prima Media (...)"* (Página 43 del expediente digital).

Siguiendo los lineamientos de la jurisprudencia antes definidos, no es dable incorporar en la base para liquidar la pensión de jubilación convencional del actor, conceptos como los viáticos, el auxilio de educación, el subsidio familiar, las incapacidades, o los demás que se pretenden con la demanda por no hacer parte de la enunciación que para ese efecto consagra el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994, antes citado.

En consecuencia, la decisión de primera instancia deberá ser confirmada.

Sin costas en esta instancia.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

CONFIRMA la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín el día 20 de octubre de 2021.

Sin costas en esta instancia.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **bcf64c339a7f1d80b7d4673346239f3ca07fe39d4b75ee37ab50a89f78c2c2e7**

Documento generado en 04/08/2022 01:53:54 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>